

## OTROS EFECTOS

**Golpe a cirugías y escuelas cerradas**

En el tercer día de huelga, los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social que mayor afectación reportaron fueron las salas de operaciones (37,17%), nutrición (21,60%) y emergencias (15,50%).

Además los hospitales con mayor cantidad de funcionarios sumados a este movimiento (según un corte a las 4 p. m.), fueron el Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón (50,4%); San Rafael de Alajuela (39,2%); Hospital de Golfito (26,9%); Calderón Guardia (25,4%), y Tomás Casas (24,2%).

En tanto el número de centros educativos cerrados aumentó con respecto al martes. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Educación Pública (MEP), este miércoles, el 46% de los centros educativos estuvieron abiertos. El MEP recibió informes de 4.137 escuelas y colegios, casi un 90% del total de los centros en el país.

De estas, 1.922 fueron reportados como abiertos y 2.215 como cerrados. Las Direcciones Regionales de Cartago, San José (Central, Norte y Oeste) y Heredia son las que tienen menor porcentaje de instituciones cerradas con 5%, 7% y 13%, respectivamente, mientras que las dos direcciones regionales con mayor porcentaje de centros cerrados son la zona norte con 95% y Grande de Térraba con 92%.

ras el lunes.

Ayer también hubo cierres sobre la carretera Bernardo Soto, durante las primeras horas del día, y en la Florencia del Castillo, en varias ocasiones, para evitar el ingreso de camiones al plantel de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) en el Alto de Ochozongo, pues solo en esas instalaciones se está expendiendo combustible.

En Puntarenas, impidieron el acceso de pacientes a consulta externa del Hospital y también el ingreso de ropa limpia, denunció la CCSS.

Mientras tanto, el presidente Carlos Alvarado calificó como “deplorables” los hechos registrados frente a la Asamblea y el sabotaje que cometió un trabajador de Recope para afectar la distribución de gas.

“Con profunda tristeza, hemos visto el sabotaje a bienes públicos para tratar de impedir que llegue el gas a las cocinas de los hogares o a los hospitales, la retención de un tren público afectando a sus pasajeros, la agresión de oficiales de la Fuerza Pública o a miembros de la prensa. Ni ustedes ni yo queremos esa Costa Rica.

“Desde el Gobierno de la República estamos haciendo todo lo necesario para que se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables de estos actos. Mi gobierno no tolerará estas acciones”, enfatizó Alvarado en un mensaje anoche. ■

# Liberación censura a los políticos que ‘azuzan gente’

**Aarón Sequeira**

aaron.sequeira@nacion.com

El jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, criticó los focos de violencia que hubo en la manifestación contra el plan fiscal este miércoles, en las afueras de la Asamblea Legislativa, y aseguró que hay políticos que “azuzan a la gente y se montan en tarimas para que les aplaudan”.

Benavides aludió directamente a José María Villalta, legislador del Frente Amplio, a quien señaló por incitar a los manifestantes a ponerse cada vez más violentos.

“Eso de que haya algunos violentos está planeado, han sido azuzados, los incitan, los preparan, y eso incluye a políticos que azuzan a la gente y, montados en tarimas, les lanzan discursos porque es su clientela electoral”, dijo Benavides cuando intervino en el plenario.

“Lo que no se vale en un país democrático, que es un delito, es recurrir al bloqueo de calles, porque eso es violencia, es una forma violenta de decirle a la gente ‘usted por aquí no pasa’, y un derecho fundamental de los costarricenses es la libertad de tránsito”, apuntó.

Según el legislador, es por “la debilidad de los sindicatos y de los partidos políticos que los apoyan, como el Frente Amplio”, que se sienten obligados a hacer bloqueos, para no verse tan débiles.

Antes de Benavides, Villalta había dicho, también en el plenario, que lamentaba la decisión de la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, de no abrir la barra de público.



En la sesión del plenario este miércoles, los diputados se refirieron a la marcha que llegó hasta portones del Congreso, donde varios manifestantes quitaron las vallas e intentaron ingresar al lugar. GRACIELA SOLÍS

Según el diputado, Hidalgo le indicó que eso se decidió a petición de los demás partidos, pero aseguró que las otras fracciones no solicitaron la medida.

“Si una persona usa violencia, debe intervenir la seguridad, pero eso no se puede usar como excusa. Es un precedente peligroso que, por petición de las fracciones, se cierren las barras de público negando la participación ciudadana”, dijo el frenteamplista.

Villalta también criticó que la posición del Poder Ejecutivo sea la de pedir que se deponga la huelga pero al mismo tiempo sentenciar que el plan fiscal

“va” pues estima que no son condiciones para el diálogo.

“Tal vez no se pueda sacar de la agenda, pero sí dar un compás de espera, negociar”, señaló.

**Sin pausas.** La jerarca parlamentaria, Carolina Hidalgo del Partido Acción Ciudadana, manifestó que “es normal que frente a una reforma fiscal existan movimientos y presiones” que se tienen que escuchar y ver.

Aunque dijo que los diputados son “seres humanos permeables en lo personal y lo político” a lo que plantea la gente contra el plan tributario, Hidalgo reiteró que, pese a las presio-

nes, la reforma seguirá su trámite en el Congreso y apuntó que no se puede dar diálogo cuando se está dando “la violencia como se está dando afuera”.

Con ella coincidió el jefe de fracción de la Unidad Socialcristiana, Erwen Masís, para quien la decisión de mantener el plan fiscal “no es antojadiza”.

“La reactivación económica, la contención del gasto y los impuestos son el camino único para contener una debacle, evitar que el país se nos caiga y evitar una crisis. El plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, desde mi óptica, tiene que caminar”, expuso Masís. ■

## Pedradas y botellazos desdibujaron marcha

**Yerys Daniel Salas**

yerys.salas@nacion.com

Al mediodía, sin amenaza de lluvia y sin amagos de violencia, una gran masa de trabajadores completó su marcha hacia Cuesta de Moras, a las puertas de la Asamblea Legislativa, donde se discutió la razón de su protesta: la reforma fiscal.

Era una variada muestra de educadores, estudiantes, empleados públicos y pensionados. Había comparsa, boyeros y dramatizaciones artísticas. Incluso se unieron defensores del matrimonio igualitario y del aborto terapéutico.

Frente a la entrada principal del Congreso, Andrés Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, afirmaba que no pretendían ser recibidos por los diputados, sino

“dar un golpe en la mesa para que se caiga el plan fiscal”.

Al otro costado, la exigencia era “abran las puertas” para que entraran a la Asamblea los dirigentes sindicales.

En ambos lados, policías y banderas contenían a los manifestantes. Al lado sur, la multitud permaneció tranquila en tanto al norte la tensión subió entre huelguistas y Fuerza Pública.

Los marchistas pasaron de recriminaciones verbales a lanzar monedas, piedras y botellas a los oficiales y a la prensa, acusada de ocultar el verdadero impacto de la huelga, que completó tres días este miércoles.

Más policías llegaron a reforzar el área. La indicación del ministro de Seguridad, Michael Soto, había sido no usar la fuerza, pero algunas agresiones fue-

### Reclamos

“EL GOBIERNO QUIERE PONERNOS A PAGAR LA CRISIS A TODOS LOS COSTARRICENSES, SI TANTO QUIERE HACER UN PLAN PARA PAGAR LA DEUDA, TIENE QUE INCLUIRLOS A TODOS, NO SOLO LAS CLASES MEDIAS Y BAJAS.

**Heiner Rojas**  
Funcionario  
Hospital San Juan de Dios

“SI EL GOBIERNO SE HUBIERA SENTADO A NEGOCIAR (CON LOS SINDICATOS) DESDE UN PRINCIPIO, EL PLAN (FISCAL) PODRÍA BENEFICIAR AL PUEBLO, PERO NO QUISIERON NEGOCIAR CON LOS SINDICATOS, NI CON EL PUEBLO.

**Delma Murillo**  
Maestra  
Escuela República del Perú

ron respondidas.

“Hay gente infiltrada para que esto salga mal, no caigamos en provocaciones”, aseguró un líder gremial al micrófono.

Minutos después, en medio del zafarrancho los manifestantes removieron las banderas que evitaban el paso hacia el Congreso y, como única barreira, quedaron los policías.

El reporte final de Soto fue de seis detenidos y dos oficiales afectados con gas pimienta.

Luego vino un aguacero, la intensidad bajó, aunque gritos e insultos continuaron. La Fuerza Pública siguió en el sitio hasta las 3:30 p. m., cuando solo quedaban los estragos del enfrentamiento: capas plásticas, botellas y más basura. ■